



"2025, Año de la Mujer indígena"

Recurso de Revisión: FGRI2504879
Solicitud de Información: 450024600043225
Sujeto Obligado: Fiscalía General de la República

Ciudad de México, a diecinueve de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTO el estado que guarda el expediente relativo al recurso de revisión al rubro citado y de conformidad con lo previsto en los artículos 6°, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 fracción V, 8, 10, 13, 34, 35 fracciones I, II y XIX, 36, 144, 145, 146, 147, 148, 153 y Décimo Octavo transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción XX y 206 del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República; así como del ACUERDO A/OIC/002/2025 publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de abril de dos mil veinticinco, se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I.- REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE SIMPLIFICACIÓN ORGÁNICA. El veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación orgánica. La reforma redefinió la organización administrativa y estableció un nuevo esquema de distribución de competencias, con efectos directos en la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General de la República, particularmente en lo relativo a sus atribuciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.

II.- EXPEDICIÓN DE LEYES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. El veinte de marzo de dos mil veinticinco, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expiden la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y se reforma el artículo 37 fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

III.- REFORMA AL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. El ocho de abril de dos mil veinticinco, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República, mediante la cual se



modificaron, entre otros, los artículos 5 y 206, incorporando diversas unidades administrativas y precisando la integración de las áreas del Órgano Interno de Control, destacando la creación de esta Unidad de Vigilancia y Cumplimiento en Materia de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales.

IV.- AUTORIDAD GARANTE. El dieciocho de abril de dos mil veinticinco, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/OIC/002/2025, en el cual se estableció que esta Unidad de Vigilancia y Cumplimiento en Materia de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República fungirá como Autoridad Garante en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en la Fiscalía General de la República.

V.- COMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO SOBRE LA MIGRACIÓN DE EXPEDIENTES. El veintisiete de junio de dos mil veinticinco, la Directora General de Plataformas para la Integridad y Transparencia en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno solicitó se fijara fecha de inicio para la reanudación de actividades en los asuntos en la materia.

VI.- ACUERDO DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES. El treinta de junio de dos mil veinticinco, el entonces Titular de la Unidad de Vigilancia y Cumplimiento en Materia de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República emitió el *"Acuerdo mediante el cual la Autoridad Garante del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República establece la reanudación de los plazos relacionados con los expedientes que obran en posesión de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno"*, fijando como fecha de reanudación de actividades el uno de julio de dos mil veinticinco.

VII.- MIGRACIÓN DE ASUNTOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO. El siete de julio de dos mil veinticinco, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno remitió a esta Autoridad Garante, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, diversos asuntos que tenía bajo su resguardo.

VIII.- HABILITACIÓN DEL BUZÓN-SICOM. El diecisiete de julio de dos mil veinticinco, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inició con los trabajos de habilitación del Buzón-SICOM a esta Autoridad Garante, mediante el cual se establecería la interacción entre los sujetos obligados y las Autoridades Garantes.

IX.- RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES POR PARTE DE LA AUTORIDAD GARANTE. El veintiocho de julio de dos mil veinticinco, se celebró una diligencia de entrega-



recepción entre el entonces Titular de la Unidad de Vigilancia y Cumplimiento en Materia de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en la cual fueron transferidos diversos expedientes físicos y electrónicos.

X.- SOLICITUD. El seis de agosto de dos mil veinticinco, una persona presentó una solicitud de acceso a la información, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la cual requirió a la Fiscalía General de la República en su carácter de sujeto obligado, lo siguiente:

"Buenos Días, solicito a esa Representación Social de la Federación que me facilite información respecto de lo siguiente:

- 1.-cantidad de carpetas de investigación abiertas por delitos meramente marítimos (piratería, robo a mano armada en el mar, pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, etc.).
- 2.- en que tipo de fiscalía fueron radicadas (FEMDO, UECS, etc.).
- 3.- cuantas de estas llegaron a la pena corporal del imputado.

se remita en formato Excel lo solicitado, clasificado en los últimos 5 años a la recepción del presente." (Sic)

XI.- PRÓRROGA. El tres de septiembre de dos mil veinticinco, el sujeto obligado notificó a la persona solicitante, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, una prórroga para dar atención a la solicitud de acceso a la información.

XII.- RESPUESTA. El dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco, mediante oficio FGR/UETAG/004376/2025, el sujeto obligado dio respuesta a la persona solicitante en los siguientes términos:

*"Con fundamento en lo establecido en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 2, 19, 41, fracciones II y V, 133 y 134 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 11º, fracción XV de la Ley de la Fiscalía General de la República; 5º, fracción I, inciso b, subinciso ii y 20º del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República; en relación con su **solicitud de acceso a la información**, dirigida a esta **Fiscalía General de la República**, consistente en:*

"Buenos Días, solicito a esa Representación Social de la Federación que me facilite información respecto de lo siguiente: 1.-cantidad de carpetas de investigación abiertas por delitos meramente marítimos (piratería,



robo a mano armada en el mar, pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, etc.). 2.- en que tipo de fiscalía fueron radicadas (FEMDO, UECS, etc.). 3.- cuantas de estas llegaron a la pena corporal del imputado. se remita **en formato Excel lo solicitado**, clasificado en los últimos 5 años a la recepción del presente." (Sic)

Se hace de su conocimiento que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su solicitud fue turnada para su atención a las Unidades Administrativas que conforme a las atribuciones y facultades previstas en la Ley de la Fiscalía General de la República, su Estatuto Orgánico y demás disposiciones aplicables, pudieran pronunciarse al respecto, las cuales atendieron su solicitud en los términos siguientes:

De conformidad con lo previsto en los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4° de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, **el derecho de acceso a la información** comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información de cualquier autoridad, agencia, comisión, comité, corporación, ente, entidad, institución, órgano, organismo o equivalente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los tres niveles de gobierno, órganos constitucionalmente autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación.

Partiendo del principio de máxima publicidad, la totalidad de la información debe de estar al alcance de todas las personas -salvo sus excepciones-, y las autoridades tienen la obligación de otorgar el acceso a los documentos generados, obtenidos, adquiridos, transformados o que se encuentren en su posesión, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones que le sean asignadas, en el formato en el que se encuentre, **sin la necesidad de elaborar documentos adicionales para atender las solicitudes de acceso a información**, conforme a lo establecido en el artículo 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

De la armónica interpretación al precepto legal antes señalado, se advierte que los particulares podrán requerir a los sujetos obligados el acceso a la documentación que obre dentro de sus archivos, o que implica que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública **regula el acceso a documentos que obren en los archivos del sujeto obligado y no a la generación de nuevos documentos**.

De tal suerte, una solicitud de acceso a la información debe de estar encaminada a recibir cualquier expresión documental en el marco de las vertientes antes descritas, que se encuentre en posesión de cualquier autoridad



y que así sea requerida por los particulares, sin que de ello devenga la generación de un documento en específico.

En esas consideraciones y tomando en cuenta que es de su interés que esta autoridad dé atención a su solicitud a través del llenado de un documento específico en formato Excel, hecho que se traduce en la elaboración de un documento ad hoc, es que deviene inatendible su solicitud de información en los términos planteados, ello al no apegarse a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin otro particular, se hace propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo."
(Sic)

XIII.- RECURSO DE REVISIÓN. El diecinueve de septiembre de dos mil veinticinco, una persona interpuso recurso de revisión a través la Plataforma Nacional de Transparencia, en contra de la respuesta otorgada por la Fiscalía General de la República, en los siguientes términos:

"Si bien el artículo 131 de la ley de transparencia versa que no habrá necesidad de elaborar documento adicional alguno, la misma ley de transparencia obliga al sujeto a proporcionar la información solicitada, entendiéndose que de la presente no se dio respuesta alguna al solicitante, cortándole sus derechos constitucionales de acceso a la información.

Aunado lo anterior, el mismo artículo de la ley versa que los sujetos obligados deberán, otorgar los documentos que se encuentren en sus archivos, por lo tanto en su poder, sin la necesidad de elaborar documento adicional alguno, por lo que, este supuesto no es aplicable a la presente Solicitud, en virtud de que el solicitante no requirió documento adicional a los a los que ya obran en poder de esa representación social de la Federación, únicamente como se expresó en el texto de la solicitud, requirió que los datos a otorgar fueran plasmados en un formato específico, lo cual no implica que para poder dar respuesta a la presente deba elaborarse documentos adicionales a los ya existentes como tal.

Es menester señalar que es justo esa fiscalía, quien cuenta con expertos en la litis, razón, por la cual el suscrito se ve extrañado de una clara malinterpretación de la ley, en comento, por parte del personal designado para dar contestación a la multicitada solicitud.

Por último, y no menos importante es justo esa fiscalía, quien debería velar por hacer valer los intereses del ciudadano mexicano y por tanto velar por los derechos humanos que le otorga nuestra carta magna.



Sin más que agregar al presente, solicito se ha revisada la presente solicitud de información por un experto en la materia, quien le dé la atención debida."
(Sic)

XIV.- TRÁMITE DEL RECURSO DE REVISIÓN.

a) Remisión de oficio al Órgano Interno de Control. El dieciocho de julio de dos mil veinticinco, la persona Titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera remitió al entonces Titular del Órgano Interno de Control, mediante oficio número FGR/OM/CFSPC/483/2025, un sobre cerrado relativo a una solicitud de transparencia que menciona hechos atribuibles a diversas personas servidoras públicas de la Institución, a fin de que se determinara lo que en derecho correspondiera.

b) Solicitud formulada por esta Autoridad Garante. El veinte de agosto de dos mil veinticinco, mediante oficio FGR/OIC/AG/020/2025, esta Autoridad Garante solicitó a la Dirección General de Recursos de Revisión y de Inconformidad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno precisara si subsistían actuaciones pendientes de entrega respecto de los expedientes de recursos de revisión, cumplimientos y responsabilidades remitidos el veintiocho de julio de dos mil veinticinco por el Comité de Transferencia del entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante INAI).

c) Atención a la solicitud. El veintisiete de agosto de dos mil veinticinco, mediante oficio T003/DGRRyI/234/2025, la Dirección General de Recursos de Revisión y de Inconformidad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que no existían actuaciones adicionales pendientes de entrega, precisando que las constancias en medios físicos habían sido recibidas en el estado en que fueron entregadas por el Comité de Transferencia del entonces INAI.

d) Reanudación de asuntos. El uno de septiembre de dos mil veinticinco, el Titular de esta Autoridad Garante del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República ordenó la reanudación de los asuntos que fueron entregados de forma física y/o electrónica por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con el objeto de que se emitieran los acuerdos correspondientes, atendiendo al estado procesal en el que se encontraran las actuaciones de los expedientes. Asimismo, se instruyó a que, una vez desahogados los trámites legales conducentes, se continuara con la debida sustanciación de los procedimientos.

e) Admisión del recurso de revisión. El veinticuatro de septiembre de dos mil veinticinco, esta Autoridad Garante notificó a las partes la admisión del recurso de revisión e integró el expediente respectivo, otorgándoles un plazo de siete días hábiles, contados a partir de dicha notificación, para que manifestaran lo que a su derecho



conviniera, de conformidad con el artículo 153, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

f) Alegatos del recurrente. El veintisiete de septiembre de dos mil veinticinco, esta Autoridad Garante recibió mediante el correo electrónico designado para tal efecto, el escrito de alegatos de la parte recurrente, mismo que se desahogó en los términos siguientes:

*"El que suscribe, C. [...], por mi propio derecho y representación, señalando para efectos de oír y recibir notificaciones el correo web [...], así como a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, derivado del oficio núm. **FGR/UETAG/004376/2025** de fecha 18 de septiembre de 2025 y dentro del Recurso de Revisión núm. **FGRAI2504879** de veintitrés de septiembre del actual, en el cual el suscripto obra como parte solicitante y agraviado de la autoridad garante, ante usted, comparezco y expongo:*

Con fundamento en lo previsto por los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 7 y 153 fracc. IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo contenido en el acuerdo "quinto" del oficio mediante el cual se admite el recurso de revisión que nos ocupa, por medio del presente formulo los alegatos siguientes:

- 1. La autoridad garante decidió no respetar el derecho del suscripto al acceso a la información pública y transgredir derechos humanos al tenor de lo que establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la cual el Estado Mexicano es parte, respecto de investigar y recibir información, en este sentido y de conformidad con lo establecido en el artículo 133 constitucional, el acto de la autoridad vulneró los derechos humanos que me asisten.*
- 2. La autoridad garante basó su determinación de negarme el acceso a la información y vulnerar mis derechos en lo previsto por el artículo 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública alegando que el haber solicitado la respuesta a mi solicitud de información en un formato específico (Excel) conllevaba a la elaboración de documentos extras siendo esto equivocado ya que la misma ley en su artículo 3 fracción IX establece lo que determina como "documento" y este precepto jamás establece que formular la respuesta en un formato específico constituya la elaboración de documentos extras, es así que resulta absurdo vulnerar mis derechos por esta razón.*
- 3. El artículo 7 de la ley de la materia establece que: "En la aplicación e interpretación de la presente Ley, deberá prevalecer el principio de máximo publicidad" y que "En todo momento, se deberá favorecer la protección más amplia de los derechos de las personas". Lo que me permite deducir que quien*



haya sido el servidor público encargado de hacer valer mi derecho FUNDAMENTAL de acceso a la información es alguien que claramente desconoce la ley, lo que resulta risorio e inaceptable ya que es justo esa fiscalía el ente que debería estar más preparado.

Debido a lo anteriormente descrito, solicito a esa autoridad lo siguiente:

PRIMERO. Tenerme por presentado en los términos de este escrito, haciendo de su conocimiento que los hechos aquí descritos vulneran derechos humanos.

SEGUNDO. Se sirva ordenar la práctica de todas y cada una de las diligencias que estime necesarias a fin de dar pronta solución al presente recurso.

TERCERO. Se de vista de los perjuicios cometido en mi contra al órgano competente para que sancione conforme a lo que establezcan los ordenamientos de esa Fiscalía General de la Republica al servidor público que dio contestación a mi solicitud, mismo que VULNERO mis derechos humanos y en su oportunidad se dé constancia de esto." (Sic)

g) Alegatos del sujeto obligado. El tres de octubre de dos mil veinticinco, esta Autoridad Garante recibió el oficio de alegatos número FGR/UETAG/004647/2025, emitido por la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental del sujeto obligado, en el que se aprecia lo siguiente:

"ALEGATO

ÚNICO. Del análisis realizado al agravio formulado por el ahora recurrente, se advierte que **no le asiste razón y deviene infundado**, toda vez que este Sujeto Obligado **cumplió con el procedimiento de búsqueda de la información**, conforme a lo previsto en el artículo 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Es decir, la búsqueda de la información requerida se realizó en los archivos físicos y electrónicos, bases de datos, libros de gobierno de la **Fiscalía Especializada en Control Regional**, de la **Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos**, de la **Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada**, así como en la **Oficialía Mayor** específicamente a la **Unidad de Planeación y Coordinación Interinstitucional**; toda vez que de las atribuciones que les confiere la Ley de la Fiscalía General de la República, el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República y demás normatividad aplicable, pudieran contar con la información requerida.

Derivado de dicha búsqueda, se **reitera** en señalar que de conformidad con lo previsto en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4º de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, **el derecho de acceso a la información** comprende solicitar,



investigar, difundir, buscar y recibir información de cualquier autoridad, agencia, comisión, comité, corporación, ente, entidad, institución, órgano, organismo o equivalente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los tres niveles de gobierno, órganos constitucionalmente autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación.

Partiendo del principio de máxima publicidad, la totalidad de la información debe de estar al alcance de todas las personas -salvo sus excepciones-, y las autoridades tienen la obligación de otorgar el acceso a los documentos generados, obtenidos, adquiridos, transformados o que se encuentren en su posesión, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones que le sean asignadas, en el formato en el que se encuentre, sin la necesidad de elaborar documentos adicionales para atender las solicitudes de acceso a información, conforme a lo establecido en el artículo 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

De la armónica interpretación al precepto legal antes señalado, se advierte que los particulares podrán requerir a los sujetos obligados el acceso a la documentación que obre dentro de sus archivos, o que implica que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública regula el acceso a documentos que obren en los archivos del sujeto obligado y no a la generación de nuevos documentos.

De tal suerte, una solicitud de acceso a la información debe de estar encaminada a recibir cualquier expresión documental en el marco de las vertientes antes descritas, que se encuentre en posesión de cualquier autoridad y que así sea requerida por los particulares, sin que de ello devenga la generación de un documento en específico.

En esas consideraciones y tomando en cuenta que es del interés de la parte recurrente que esta autoridad dé atención a su solicitud a través del llenado de un documento específico en formato de Excel, hecho que se traduce en la elaboración de un documento ad hoc, es que se estima deviene inatendible su solicitud de información en los términos planteados, ello al no apegarse a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por lo expuesto y fundado, atentamente solicito a usted Autoridad Garante:

PRIMERO. - Tener por reconocida mi personalidad en el presente escrito de formulación de alegatos y por hechas las manifestaciones en él contenidas.

SEGUNDO. - En su oportunidad y previos los trámites legales correspondientes se **confirme** la respuesta otorgada por este Sujeto Obligado, de conformidad



con lo dispuesto en el artículo 154, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo." (Sic)

h) Cierre de instrucción. El catorce de noviembre del dos mil veinticinco, se emitió el acuerdo de cierre de instrucción, en términos de lo dispuesto en el artículo 153, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual fue notificado a las partes el dieciocho de noviembre de dos mil veinticinco.

Debido a que fue substanciado el expediente y no existiendo diligencia pendiente de desahogo, se emite la resolución que conforme a derecho procede, de acuerdo con los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia. Esta Autoridad Garante es competente para conocer y resolver el presente expediente con fundamento en el artículo 6°, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción V, 8, 10, 13, 34, 35, fracciones I, II y XIX, 36, 144, 145, 146, 147, 148, 153 y Décimo Octavo transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción XX y 206 del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República; así como del ACUERDO A/OIC/002/2025 publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de abril de dos mil veinticinco.

SEGUNDO. Estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento. De las constancias que forman parte de este recurso, se advierte que previo al estudio del fondo es necesario efectuar el estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento que se adviertan, para determinar lo que en Derecho proceda, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente.¹

I. Improcedencia. El artículo 158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece como causales de improcedencia las siguientes:

"Artículo 158. El recurso será desechado por improcedente cuando:

- I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 144 de la presente Ley;**
- II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por la recurrente;**

¹ Sirve como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: "**Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.**"



- III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 145 de la presente Ley;*
- IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 147 de la presente Ley;*
- V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada;*
- VI. Se trate de una consulta, o*
- VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos."*

Derivado de lo anterior, se procederá a realizar un análisis individual de las fracciones contenidas en dicho precepto:

- **Fracción I.** De las constancias que obran en el expediente, se tiene que el presente recurso de revisión fue presentado en tiempo y forma, toda vez que el sujeto obligado hizo de conocimiento la respuesta el dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco y la persona recurrente impugnó la misma el diecinueve de septiembre del mismo año, por lo que se encuentra dentro del plazo previsto en el artículo 144 de la Ley General de la materia, es decir, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que fue notificada la respuesta a la persona solicitante.
- **Fracción II.** De las actuaciones que obran en el expediente que nos ocupa, esta Autoridad Garante no advierte que la parte recurrente hubiese promovido algún medio de defensa ante órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación en contra del mismo acto impugnado mediante el presente recurso.
- **Fracción III.** En el artículo 145 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establecen los supuestos de procedencia del recurso de revisión, cuyo contenido se transcribe a continuación:

"Artículo 145. El recurso de revisión procede en contra de:

- I. La clasificación de la información;*
- II. La declaración de inexistencia de información;*
- III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;*
- IV. La entrega de información incompleta;*
- V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;*
- VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley;*
- VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado;*
- VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible para la persona solicitante;*
- IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;*



X. La falta de trámite a una solicitud;

XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información;

XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, o

XIII. La orientación a un trámite específico.

La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución al recurso de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI de este artículo, es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante la Autoridad garante correspondiente."

En ese sentido, del extracto normativo anterior, así como de las manifestaciones que obran en autos, se advierte de forma preliminar que, en el caso concreto se actualiza la fracción X del artículo 145 del precepto legal en cita, es decir, la falta de trámite a una solicitud, presunción que será materia de un análisis detallado en líneas posteriores.

- **Fracción IV.** En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del artículo 147 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- **Fracción V.** De las manifestaciones realizadas por la parte recurrente, no se desprende que se haya impugnado la veracidad de la información proporcionada por el sujeto obligado.
- **Fracción VI.** De la revisión al recurso de revisión interpuesto, no se advirtió que la pretensión del particular versara en una consulta.
- **Fracción VII.** Del contraste de las constancias de la solicitud de información y del recurso de revisión interpuesto, no se advierte que se hubiesen ampliado los términos de la solicitud original.

Del análisis realizado por esta Autoridad Garante, se advierte que **no se actualiza** alguna causal de **improcedencia**.

II. Sobreseimiento. Al respecto, el artículo 159 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, prevé lo siguiente:

"Artículo 159. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:

I. El recurrente se desista;

II. El recurrente fallezca o tratándose de personas morales que se disuelvan.

III. *El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia, o*

IV. *Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del presente Capítulo."*

En relación con este punto y del estudio oficioso realizado por esta Autoridad Garante, de las constancias que integran el expediente en el que se actúa, se advierte lo siguiente:

- **Fracción I.** No obra constancia que acredite el desistimiento de la persona recurrente respecto del presente medio de impugnación, por lo que el supuesto previsto en la fracción I del artículo 159 no se actualiza.
- **Fracción II.** No se encuentra elemento alguno que permita tener por acreditado el fallecimiento de la persona recurrente, ni la disolución de persona moral alguna, por lo que el supuesto previsto en la fracción II del artículo 159 resulta inaplicable.
- **Fracción III.** No se advierte que el sujeto obligado haya modificado o revocado la respuesta impugnada de tal manera que el recurso de revisión quedara sin materia, razón por la cual el supuesto previsto en la fracción III del artículo 159 no se actualiza.
- **Fracción IV.** Tampoco se desprende la existencia de causal de improcedencia superviniente que genere el sobreseimiento del recurso, razón por la cual el supuesto previsto en la fracción IV del artículo 159 no se actualiza.

Del estudio oficioso realizado, esta Autoridad Garante concluye que **no se actualiza** ninguna de las causales de **sobreseimiento** previstas en el artículo 159 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que procede continuar con el análisis de fondo del asunto.

TERCERO. Resumen de agravios. En el caso que nos ocupa, conviene recordar que una persona solicitó a la Fiscalía General de la República diversa información relativa a las carpetas de investigación abiertas por delitos meramente marítimos, tales como piratería, robo a mano armada en el mar, pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, entre otros.

Asimismo, requirió que se precisara en qué tipo de fiscalía fueron radicadas dichas carpetas -por ejemplo, en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada o en las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro- y cuántas de



ellas derivaron en la imposición de una pena corporal al imputado; asimismo, solicitó que la información se remitiera en formato Excel, del periodo a partir de los últimos cinco años a la fecha de recepción de la solicitud.

Ahora bien, se tiene que en respuesta, el sujeto obligado, por conducto de la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental, informó lo siguiente:

- Que con fundamento en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 2, 19, 41, fracciones II y V, 133 y 134 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 11º, fracción XV de la Ley de la Fiscalía General de la República; así como 5º, fracción I, inciso b, subinciso ii y 20º de su Estatuto Orgánico, la solicitud de información -referente a la cantidad de carpetas de investigación abiertas por delitos meramente marítimos, tales como piratería, robo a mano armada en el mar y pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; el tipo de fiscalía en que fueron radicadas (por ejemplo, FEMDO o UECS); y cuántas de éstas derivaron en la imposición de pena corporal al imputado, solicitando que la información se remitiera en formato Excel desde los últimos cinco años, a la fecha de interposición de la solicitud- fue turnada para su atención a las Unidades Administrativas competentes.
- Conforme a los artículos 6º constitucional y 4º de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el derecho de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información de cualquier autoridad que ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.
- Bajo el principio de máxima publicidad, la totalidad de la información debe estar al alcance de todas las personas, salvo sus excepciones, y las autoridades tienen la obligación de otorgar el acceso a los documentos generados, obtenidos o que se encuentren en su posesión, sin la necesidad de elaborar documentos adicionales para atender las solicitudes.
- En términos del artículo 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados deben entregar la información en el formato en que se encuentre, sin generar documentos nuevos.
- De la interpretación de dicho precepto se desprende que la Ley regula el acceso a documentos que obren en los archivos del sujeto obligado y no la creación de documentos adicionales.



- En consecuencia, al implicar lo solicitado la elaboración de un documento específico en formato Excel, la petición resulta ininteligible en los términos planteados, al no ajustarse a lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Posteriormente, la persona solicitante interpuso recurso de revisión manifestando su inconformidad con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, al considerar que dicha respuesta vulnera su derecho constitucional de acceso a la información pública.

Señaló que, si bien el artículo 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que no habrá necesidad de elaborar documentos adicionales, la misma ley obliga a los sujetos a proporcionar la información solicitada, por lo que, en el presente caso, no se dio respuesta alguna al solicitante, restringiendo indebidamente su derecho de acceso a la información.

Argumentó que el artículo citado dispone que los sujetos obligados deben otorgar los documentos que se encuentren en sus archivos, sin la necesidad de elaborar documentos adicionales; sin embargo, este supuesto no resulta aplicable al caso, ya que no se solicitó la creación de un documento nuevo, sino únicamente que los datos existentes fueran plasmados en un formato específico, lo cual no implica la generación de información adicional.

Posteriormente la persona recurrente presentó su escrito de alegatos, en dicho documento, la persona manifestó su desacuerdo con la actuación de la autoridad, al considerar que se afectó su derecho de acceso a la información pública, con base en los principios reconocidos en instrumentos internacionales.

Asimismo, señaló que la negativa de información se basó erróneamente en el artículo 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al considerar que solicitar los datos en formato Excel implicaba la elaboración de documentos nuevos, cuando -a su juicio- dicha petición no conlleva tal supuesto.

Finalmente, argumentó que el servidor público encargado de atender su solicitud desconoció el principio de máxima publicidad previsto en el artículo 7 del mismo ordenamiento, solicitando que se revisara la actuación y se ordenaran las diligencias necesarias para garantizar una adecuada atención a su solicitud.

CUARTO. Litis. Como se observa de la lectura íntegra a los agravios de la persona recurrente, y tomando en consideración las actuaciones de las partes, en estricta aplicación de la suplencia de la queja a favor de la persona recurrente, prevista en el artículo 148 de la Ley General en la materia, esta Autoridad Garante advierte que las manifestaciones vertidas tienden a controvertir la falta de trámite a una solicitud, por lo que se actualiza la causal prevista en la fracción X del artículo 145 de la propia Ley.



QUINTO. Estudio de fondo. En relación con lo anterior, con la intención de dilucidar la *litis* del presente asunto, se tiene que, al rendir sus alegatos, el sujeto obligado manifestó lo siguiente:

- Que del análisis realizado al agravio formulado por la parte recurrente, se advierte que no le asiste la razón y que éste deviene infundado, toda vez que el sujeto obligado cumplió con el procedimiento de búsqueda de la información, conforme a lo previsto en el artículo 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realizando dicha búsqueda en los archivos físicos y electrónicos, bases de datos y libros de gobierno de la Fiscalía Especializada en Control Regional, de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, así como en la Oficialía Mayor, específicamente en la Unidad de Planeación y Coordinación Interinstitucional, con base en sus atribuciones y facultades.
- Derivado de dicha búsqueda, reiteró que el derecho de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información de cualquier autoridad, órgano o entidad que ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, conforme a los artículos 6° constitucional y 4° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Bajo el principio de máxima publicidad, las autoridades tienen la obligación de otorgar acceso a los documentos generados, obtenidos, adquiridos o que se encuentren en su posesión, sin que exista la necesidad de elaborar documentos adicionales para atender las solicitudes, en términos del artículo 131 del citado ordenamiento.
- De la interpretación armónica de dicho precepto se desprende que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública regula el acceso a documentos que obren en los archivos del sujeto obligado, sin que implique la creación de nuevos documentos o formatos específicos.
- En esas consideraciones, tomando en cuenta que la parte recurrente solicitó la atención de su requerimiento mediante el llenado de un documento específico en formato Excel —lo cual implica la elaboración de un documento ad hoc—, se estimó que la solicitud deviene inatendible en los términos planteados, al no ajustarse a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



- Se solicitó respetuosamente a esta Autoridad Garante confirmar la respuesta otorgada, en términos del artículo 154, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Establecido lo anterior, corresponde a esta Autoridad Garante verificar si el sujeto obligado observó las disposiciones previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, bajo los principios de máxima publicidad e interpretación pro persona.

Al respecto, es necesario referir que en los artículos 1 y 6º, apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que el derecho de acceso a la información es un derecho humano reconocido en ésta, del que gozarán todas las personas en el territorio nacional, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse.

En ese sentido, al tratarse de un derecho humano reconocido en la Constitución Federal, las normas que rigen el derecho de acceso a la información se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Asimismo, de los preceptos constitucionales referidos, se observa que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. Por ello, en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

Expuesto el marco normativo anterior, de una interpretación armónica a las disposiciones constitucionales señaladas, se tiene que el ejercicio del derecho de acceso a la información cuenta con las siguientes características:

- En la interpretación del derecho de acceso a la información deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
- Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la Ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.
- Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados.



En seguimiento a lo previo, los artículos 1º y 3º, fracción IX, de la Ley General de la materia, disponen que dicho ordenamiento tiene por objeto garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios.

En ese sentido, en materia de transparencia debe entenderse por "documentos" los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas y en general, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus personas servidoras públicas y demás integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración, ni el medio en el que se encuentren, ya sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico.

En relación con lo anterior, el artículo 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, refiere que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que la persona solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.

En este tenor, es posible observar que el derecho de acceso a la información está sujeto al principio de documentación, es decir, comprende el acceso a los documentos generados, obtenidos, adquiridos, transformados o, en general, que se encuentren en posesión de los sujetos obligados.

A fin de robustecer lo anterior, conviene señalar que, si bien el criterio *SO/016/2017* proviene del Pleno del extinto INAI, esta Autoridad Garante lo retoma por analogía, en tanto aporta lineamientos interpretativos congruentes con el principio de máxima publicidad, en el sentido de que, cuando las personas peticionarias presenten solicitudes sin identificar de manera precisa los documentos que pudieran contener la información de su interés, o bien, la solicitud constituya una consulta pero la respuesta pudiera obrar en algún documento en poder de los sujetos obligados, éstos deben dar a dichas solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión documental.

Establecido lo anterior, cabe retomar que la persona solicitante requirió diversa información relacionada con las carpetas de investigación abiertas por delitos meramente marítimos, tales como piratería, robo a mano armada en el mar y pesca



illegal, no declarada y no reglamentada, entre otros, precisando en qué tipo de fiscalía fueron radicadas dichas carpetas y cuántas de ellas derivaron en la imposición de una pena corporal al imputado; asimismo, pidió que la información se remitiera en formato Excel, desde los últimos cinco años a la fecha de recepción de la solicitud.

En ese sentido, si bien la parte recurrente precisó un documento específico al cual desea acceder, lo cierto es que el sujeto obligado estuvo en posibilidad de realizar una búsqueda de alguna expresión documental que atendiera el requerimiento de información.

Aunado a lo anterior, debe tomarse en consideración que las personas no tienen la obligación de conocer la denominación precisa de los documentos solicitados, por lo que el sujeto obligado debió utilizar un criterio amplio para la búsqueda.

Por ello, en la aplicación e interpretación de la Ley en la materia deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, las disposiciones que regulan aspectos de transparencia y acceso a la información previstas en la legislación federal en su conjunto deberán interpretarse armónicamente atendiendo al principio *pro persona*.

Por consiguiente, para cumplir con las disposiciones de la materia, los sujetos obligados deberán contar con una Unidad de Transparencia que tendrá, entre otras, las facultades para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información y realizar los trámites internos necesarios para la atención de las mismas, a efecto de garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información.

Así, se tiene que la Unidad de Transparencia es el vínculo entre el sujeto obligado y la persona solicitante, por lo que ésta debe llevar a cabo todas las gestiones necesarias a fin de facilitar el acceso a la información.

Ahora bien, en atención a la materia de la solicitud que nos ocupa, es importante señalar que, en un primer momento, el sujeto obligado indicó que la solicitud de información fue turnada a las unidades administrativas que pudieran ser competentes, sin indicar cuáles fueron; no obstante, si bien lo anterior fue subsanado durante la etapa de alegatos, lo cierto es que no es posible tener certeza de si éstas activaron el procedimiento de búsqueda dentro de sus archivos o, en su caso, del criterio empleado para localizar la información, toda vez que el sujeto obligado se limitó a señalar que la persona solicitante pretendía que su requerimiento fuera atendido mediante el llenado de un documento específico, hecho que se traducía en la elaboración de un documento *ad hoc* y, que por ello, deviene inatendible la solicitud de información en los términos planteados.

En ese sentido, se tiene que no señaló de manera categórica si la información requerida obra en sus archivos, si esta resultaba inexistente o si cuentan con información que pudiera estar vinculada con la pretensión informativa de la persona solicitante, situación que robustece la falta de certeza de que el ente recurrido realizó una búsqueda exhaustiva y congruente dentro de la unidad administrativa aludida a la autoridad en alegatos, en términos del procedimiento previsto en el artículo 133 de la Ley General de la materia, a fin de encontrar y proporcionar una expresión documental que atendiera lo requerido, en el formato y características con que obre en sus archivos.

Sin óbice de lo anterior, se tiene que lo informado por el sujeto obligado a esta Autoridad Garante durante la etapa de alegatos no fue hecho del conocimiento de la persona recurrente.

Conforme a lo señalado, esta Autoridad Garante advierte que el agravio del hoy recurrente, fundamentado en la fracción X del artículo 145 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resulta **fundado**, por las consideraciones siguientes:

- Si bien el sujeto obligado refirió, en vía de alegatos, que turnó la solicitud para su atención a la Fiscalía Especializada en Control Regional, de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, así como en la Oficialía Mayor específicamente a la Unidad de Planeación y Coordinación Interinstitucional, lo cierto es que, se limitó a manifestar que la solicitud deviene inatendible, en tanto que la persona recurrente requiere el llenado de un documento específico, hecho que, se traduce en la elaboración de un documento *ad hoc*; motivo por el cual no es posible tener certeza si se activó correctamente el procedimiento de búsqueda o en su caso el criterio utilizado para la localización de la información de interés.

En este sentido, conviene precisar que, aun cuando se advierte como fundado el agravio relativo a la falta de trámite de la solicitud, ello no implica que los sujetos obligados tengan la obligación de elaborar documentos *ad hoc* para atender las solicitudes de acceso a la información, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley General en la materia y, por analogía, en el criterio de interpretación SO/003/2017, emitido por el Pleno del entonces INAI, mantiene relevancia interpretativa, ya que establecía que los sujetos obligados deben limitarse a otorgar acceso a los documentos que obren en sus archivos o a aquellos que, conforme a sus atribuciones, estén obligados a documentar, sin que ello implique la obligación de crear registros, listados o formatos especiales.





Como consecuencia de todo lo previamente expuesto y analizado, esta Autoridad Garante determina procedente **revocar** la respuesta del sujeto obligado e instruirle a efecto de que, dé trámite a la solicitud que nos ocupa y, con criterio amplio y congruente, realice una búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas competentes e informe del resultado obtenido a la persona solicitante.

Lo anterior, deberá hacerlo del conocimiento de la persona recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones.

Por lo expuesto y fundado, esta Autoridad Garante:

R E S U E L V E

PRIMERO. REVOCAR la respuesta emitida por el sujeto obligado, en los términos expuestos en la presente resolución, y conforme a lo establecido en el artículo 154, fracción III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 154, párrafo último, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye al sujeto obligado para que, en un término no mayor a **diez días hábiles**, contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación, cumpla con la presente resolución y, de conformidad con lo previsto en el artículo 156 de la referida Ley, en un término no mayor a tres días hábiles posteriores al plazo señalado, informe a esta Autoridad Garante sobre su cumplimiento.

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de incumplimiento de la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá conforme a lo establecido en los artículos 196 y 204, fracción XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

CUARTO. Se hace del conocimiento de la persona recurrente que, en caso de encontrarse inconforme con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla mediante juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 161 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

QUINTO. Con fundamento en el artículo 156 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, notifíquese la presente resolución a las partes a través del medio señalado para tales efectos.

Así lo resolvió y firma el **Lcdo. Miguel Ángel Cerón Cruz**, en su carácter de Titular de la Unidad de Vigilancia y Cumplimiento en Materia de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República.

